Señora
JUEZ OCTAVA CIVIL MUNICIPAL
Manizales - Caldas

12 Fls.
2 traslados

Referencia: INCIDENTE DE DESACATO
Accionado: SALUD TOTAL EPS
Accionante: KATHERINE SOTO DUQUE
Radicado: 2020 - 061

Katherine Soto Duque mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con cedula de ciudadanía **N° 1.053.819.210**, de Manizales, obrando en nombre propio, me permito presentar INCIDENTE DE DESACATO al fallo de ACCION DE TUTELA proferido por su despacho como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, conforme a lo consagrado en el Artículo 86 de la Constitución Política, y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991. Con la presente acción invoco la protección de los derechos fundamentales al Derecho al Mínimo Vital, a la Vida Digna, Salud y Seguridad Social, los cuales siguen siendo sido vulnerados por SALUD **TOTAL EPS VIREY SOLIS**, ante el no cumplimiento del fallo en mención tal como se relatará a continuación:

HECHOS:

1. El pasado 3 de febrero de 2020 fue admitida acción de tutela en el Juzgado Octavo Civil Municipal de Manizales promovida KATHERINE SOTO DUQUE en contra de SALUD TOTAL EPS con el fin de lograr la protección de sus derechos fundamentales Derecho al Mínimo Vital, a la Vida Digna, Salud y Seguridad Social, garantizados por la Constitución Política.

2. El 14 de febrero de 2020, el Octavo Civil Municipal de Manizales falla:

> *"(...) **PRIMERO:** DECLARAR la existencia de un hecho superado frete a la pretensión encaminada a ordenar a la entidad accionada hacer efectiva la valoración por medicina física y rehabilitación, dentro de la Acción de Tutela presentada por la señora KATHERINE SOTO DUQUE en contra de SASLUD TOTAL EPS.*
> ***SEGUNDO:** TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social de la señora KATHERINE SOTO DUQUE dentro de la acción de tutela presentada contra la EPS SALUD TOTAL.*
> ***TERCERO:** ORDENAR A LA EPS SALUD TOTAL a través de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, si aún no lo han hecho, reconozca y cancele a la señora*

KATHERINE SOTO DUQUE, las incapacidades medicas dadas del 12 al 21 de julio del 2019 y del 23 al 29 de julio del 2019, por lo dicho en la parte emotiva.
CUARTO: *NO CONDENAR el pago de la incapacidad del 09 al 10 de julio del 2019, por cuanto corresponde al empleador.*
QUINTO: *ORDENAR a la EPS SALUD TOTAL a través de su representante legal o quien haga sus veces, informar a este despacho sobre el cumplimiento de esta decisión, conforme a lo establecido por artículo 27 del Decreto 2591 del 1991.*
SEXTO: *ADVERTIR que el incumplimiento de lo dispuesto en el presente fallo dará lugar a la imposición de sanciones al representante legal de la entidad demandada, en los términos del artículo 52 del Decreto 2591 del 1991 y a las penales del articulo 53 ibidem. (...)"*

3. Si bien el fallo también ordena a SALUD TOTAL EPS pagar los valores que a que corresponden a las incapacidades que se tuvieron en las fechas 12 al 21 del 2019 y del 23 al 29 del 2019, y para ello le otorgo el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la decisión, para que en dicho termino pagara a KATHERINE SOTO DUQUE, el equivalente a las incapacidades dadas por enfermedad.

4. A la fecha de presentación del presente incidente de desacato, la EPS SALUD TOTAL, no ha realizado el pago ordenado en fallo proferido por su despacho El 14 de febrero de 2020.

PETICIONES

Solicito que se ponga en termino inmediato a SALUD TOTAL EPS, el cumplimiento y el acatamiento de lo ordenado por su despacho en la tutela citada con precedencia en este escrito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En derecho fundamento como aplicable el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 52 del decreto 2591 de 1991 y el artículo 9 del decreto 306 de 1992, así:

Constitución Política de Colombia.

Artículo 86: *Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para*

que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

Decreto 2591 de 1991

Artículo 52. ***Desacato.*** *La persona que incumpliere una orden de un juez proferido con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.*

Decreto 306 de 1992

ARTICULO 9o. IMPOSICION DE SANCIONES. *Para efectos de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, cuando de acuerdo con la Constitución o la ley el funcionario que haya incumplido una orden proferida por el juez sólo pueda ser sancionado por determinada autoridad pública, el juez remitirá a dicha autoridad copia de lo actuado para que ésta adopte la decisión que corresponda.*

PRUEBAS

Documentales

- Copia fallo de tutela del 03 de febrero de 2020, del el Juzgado Octavo Civil Municipal de Manizales
- Copia fallo proferido el 14de febrero del 2020 del Juzgado Octavo Civil Municipal de Manizales

NOTIFICACIONES

Para efectos legales correspondientes, solicito se sirvan notificarme de la presente solicitud conforme a los parámetros de ley en FÍSICO a la carrera 21 # 25-39, centro Manizales y al correo electrónico kathyy08922@gmail.com.

Cordialmente,

Katherine Soto D.

Katherine Soto Duque
C.C. 1.053.819.210 de Manizales
Tel: 310-4716912

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL
Manizales, Caldas, 3 de febrero de 2020

OFICIO CIRCULAR No. 194

Señora
KATHERINE SOTO DUQUE
Carrera 21 No. 25-39
Manizales – Caldas

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ACC/TE.: KATHERINE SOTO DUQUE
C.C. 1.053.819.210
ACC/DO: SALUDTOTAL EPS
RAD.: 2020-00061

Le NOTIFICO el auto proferido en la fecha dentro de la acción de tutela de la referencia, que en su parte pertinente ordenó:

"La señora KATHERINE SOTO DUQUE presentó Acción de Tutela en contra de la EPS SALUDTOTAL, porque considera que dicha entidad le está vulnerando sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, mínimo vital, dignidad humana, vida, salud y seguridad social, al no reconocer y pagar las incapacidades generadas desde el 9 de julio al 11 de julio de 2019, del 12 de julio al 21 de julio de 2019 y del 23 de julio al 29 de julio de 2019 y materializar cita con especialidad de medicina física y rehabilitación.

Como la presente Acción de Tutela reúne los requisitos del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, en consecuencia el Despacho la **ADMITE** y ordena la notificación de las partes por el medio más expedito posible.

Se ordena remitir copia de la acción a la entidad accionada para que en el término de dos (2) días contados a partir del recibo de la presente notificación se pronuncie sobre los hechos y derechos invocados en la demanda.

PRUEBAS:

Se tendrán como pruebas los documentos aportados por la parte accionante a la demanda y los que a su vez allegue la entidad demandada.

EPS SALUDTOTAL, informará:

Si la señora KATHERINE SOTO DUQUE identificada con C.C. 1.053.819.210, se encuentra afiliada a la EPS SALUDTOTAL, en caso afirmativo, en qué calidad, activo o inactivo, cotizante o beneficiario?

Si el accionante ha elevado solicitud de reconocimiento y pago de las incapacidades médicas relacionadas en la acción de tutela. En caso afirmativo expondrán desde que fecha y los motivos por los cuales no han procedido de conformidad.

Si se materializó el servicio de consulta con especialista en medicina física y rehabilitación.

De oficio se decreta la siguiente prueba: Se ordena requerir a la accionante para que en nombre propio y en forma inmediata una vez se notifique del presente auto, (i) aporte constancia o certificado de ingresos de él o de la persona de la cual dependa económicamente, así como una relación de su patrimonio que incluya bienes y los gastos

mensuales, (ii) informe la fecha en la cual presentó las incapacidades para su reconocimiento y pago ante la EPS SALUDTOTAL, allegando soporte de ello, lo anterior para que obre como prueba dentro de la presente acción de tutela.

Se les hace saber, que si no rinden el informe solicitado, en el plazo concedido, se tendrán por ciertos los hechos y se resolverá de plano (Art. 20 Dcto. 2591 de 1991).

POSPONER el trámite de los restantes asuntos que sean sometidos a estudio del juzgador. Por la Secretaría del Juzgado se dejarán las constancias pertinentes, en los asuntos que se difieran"

Atentamente,

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL
Manizales, Caldas, 17 de febrero de 2020

OFICIO CIRCULAR No. 316

Señora
KATHERINE SOTO DUQUE
Carrera 21 No. 25-39
Manizales – Caldas

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ACC/TE.: KATHERINE SOTO DUQUE
C.C. 1.053.819.210
ACC/DO: SALUDTOTAL EPS
RAD.: 2020-00061

Le NOTIFICO el fallo proferido el 14 de febrero de 2020 dentro de la acción de tutela de la referencia, que en su parte pertinente ordenó:

"**PRIMERO: DECLARAR** la existencia de un Hecho Superado frente a la pretensión encaminada a ordenar a la entidad accionada hacer efectiva la valoración por medicina física y rehabilitación, dentro de la Acción de Tutela presentada por la señora **KATHERINE SOTO DUQUE** en contra de **SALUDTOTAL EPS.**

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social de la señora **KATHERINE SOTO DUQUE** dentro de la acción de tutela presentada contra la **EPS SALUDTOTAL.**

TERCERO: ORDENAR a la **EPS SALUDTOTAL** a través de su Representante Legal o quienes hagan sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, si aún no lo ha hecho, reconozca y cancele a la señora KATHERINE SOTO DUQUE, las incapacidades médicas dadas del 12 al 21 de julio de 2019 y del 23 al 29 de julio de 2019, por lo dicho en la parte motiva.

CUARTO: NO ORDENAR el pago de la incapacidad del 09 al 10 de julio de 2019, por cuanto corresponde al empleador.

QUINTO: ORDENAR a la **EPS SALUDTOTAL** a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, informar a este Despacho sobre el cumplimiento de esta decisión, conforme a lo establecido por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1.991.

SEXTO: ADVERTIR que el incumplimiento de lo dispuesto en el presente fallo dará lugar a la imposición de sanciones al representante legal de la entidad demandada, en los términos del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, y a las penales del artículo 53 ibídem.

SEPTIMO: NOTIFICAR esta decisión a las partes advirtiéndoles que la misma puede ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

OCTAVO: ENVIAR lo actuado a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme esta decisión, si no fuere impugnada dentro de la oportunidad legal"

Atentamente,

LINA MARÍA NARANJO CARDONA
Secretaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL

Manizales, Caldas, catorce (14) de febrero de dos mil veinte (2020).

SENTENCIA No. 028

I. ASUNTO OBJETO DE DECISIÓN

Compete a este Despacho dictar sentencia dentro de la **ACCIÓN DE TUTELA** seguida contra la **EPS SALUDTOTAL** según demanda promovida por la señora **KATHERINE SOTO DUQUE**, por la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, salud, seguridad social, dignidad humana y mínimo vital.

II. HECHOS

Expone la accionante que el pasado 9 de julio de 2019 fue incapacitada por 2 días por enfermedad general, por un lumbago mecánico que limitaba su funcionalidad y con posterior remisión para fisioterapia.

Que el 11 de julio de 2019 asistió a consulta externa en la Clínica AVIDANTI SAS con especialista en dolor y cuidados paliativos, donde es diagnosticada con dolor lumbar crónico radicular y hernia discal en estudio

El 13 de julio de 2019 fue nuevamente incapacitada por 10 días del 12 de julio hasta el 21 de julio de 2019 por dolor crónico.

Que el 23 de julio de 2019 regresó a consulta de medicina general y es nuevamente incapacitada por 7 días los cuales irían del 23 de julio al 29 de julio de 2019.

Alude que el 16 de septiembre de 2019 radicó petición a la entidad accionada solicitando información por la cual no le fueron reconocidas las incapacidades, a lo que el 26 de septiembre de 2019 aclara que la liquidación o reconocimiento de las incapacidades no es procedente, en tanto que no contaba con contrato vigente, lo que no es cierto, pues en ningún momento ha faltado con sus pagos.

Alude encontrarse afiliada a la EPS desde el 1° de noviembre de 2017 en calidad de cotizante, y a la fecha no se encuentra laboralmente activa debido a que no resiste tanto tiempo de pie.[1]

III. PRETENSIONES

Solicita la accionante se tutelen sus derechos fundamentales y como consecuencia de ello, se ordene a la accionada (i) reconocer y cancelar las incapacidades del 9 de julio al 11 de julio de 2019, del 12 de julio al 21 de julio de 2019 y del 23 de julio al 29 de julio de 2019 y (ii) se le materialice la consulta con la especialidad en medicina física y rehabilitación.[2]

IV. TRÁMITE PROCESAL.

La Acción de Tutela presentada por la señora KATHERINE SOTO DUQUE contra la EPS SALUDTOTAL fue recibida y admitida el día tres (3) de febrero de dos mil veinte (2020); dándose a la accionada el término de dos (2) días para que se pronunciara sobre los hechos de la demanda y allegaran la documentación pertinente.[3]

El derecho de defensa y contradicción ha quedado plenamente garantizado dentro de la presente pretensión de tutela; no hay motivo alguno de nulidad que imponga retrotraer lo actuado a etapa anterior; concretamente, no existen terceros que deban ser vinculados a la controversia constitucional, por verse afectados con lo que aquí se decida. La acción, entonces, está planteada entre los legítimos y únicos contradictores.

V. RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADA.

La EPS SALUDTOTAL a través de la Dra. GLORIA ESPERANZA DUQUE OSPINA Administradora la Sucursal Manizales, refirió que el servicio de valoración por la especialidad de MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN se encuentra programado para el 13 de febrero de 2020 a las 7:20 a.m.

Alude que la usuaria aparece registrada en dicha entidad como cotizante dependiente con cierre de contrato laboral con la razón social JUAN FELIPE LOAIZA CARVAJAL desde el 1° de julio de 2019, por lo tanto no hay lugar a reconocer y liquidar en su favor las incapacidades médicas reclamadas.

Finalmente solicita que se declare la improcedencia de la acción de tutela.[4]

---

[1] Ver folios 26 a 28.
[2] Ver folio 30 y 31.
[3] Ver folio 32.
[4] Ver folios 36 a 40.

Siendo el momento oportuno, procede el Despacho a tomar la decisión correspondiente, conforme a las siguientes,

VI. CONSIDERACIONES:

1. La acción de tutela.

A términos del artículo 86 de la Constitución Nacional y 1° del Decreto 2591 de 1991, toda persona tiene acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la salvaguarda inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Esa protección consiste, conforme con el prealudido canon constitucional, en una orden para que aquél respecto de quien se solicite la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

2. Aspectos procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°, numeral 1° del Decreto 1983 de 2017, este Despacho es el competente para conocer de la presente acción de tutela por haber sido instaurada contra una entidad particular como lo es la EPS SALUDTOTAL, encargada de la prestación del servicio público de la salud; circunstancia que la hace susceptible de tutela de conformidad con lo establecido por el numeral 2 del art. 42 del Decreto 2591 de 1991.

La señora KATHERINE SOTO DUQUE actúa en nombre propio, razón por la cual se encuentra legitimada para promover la presente acción tuitiva.

Por último, el escrito que le dio origen al presente proceso, cumplió con las exigencias formales contenidas en los artículos 14 y 37, inc. 2°, del Decreto 2591 de 1991.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el pago de auxilio por incapacidad. Principio de Subsidiariedad.

Acerca de la procedencia para reclamar el pago de incapacidades por medio de acción de tutela, la Corte Constitucional, en Sentencia T-144 de 2016, señala las condiciones que deben darse para que proceda la tutela:

"El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos

fundamentales de las personas en Colombia, el cual sólo procede cuando el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz. De igual manera, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 dispone que es causal de improcedencia de la acción la existencia de otros recursos o medios judiciales (numeral 1°).

Lo anterior encuentra fundamento en el principio de subsidiaridad, el cual implica que, prima facie, la acción de tutela no puede desplazar los recursos judiciales ordinarios de defensa de derechos fundamentales..., en tanto son los jueces naturales, los competentes para conocer y determinar los litigios propios de la jurisdicción ordinaria o la contencioso-administrativa, según el caso.

12. En virtud de tal principio, esta Corporación ha señalado que, de manera general, las acciones de tutela no proceden para el reconocimiento y pago de derechos de carácter económico surgidos de una relación laboral, como los auxilios por incapacidad, ya que los mismos son protegidos en el ordenamiento jurídico colombiano a través de los procesos laborales ordinarios.

En efecto, el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, fijó en cabeza de la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de la seguridad social, el conocimiento de "las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con los contratos."

Así mismo, la Corte ha reiterado que el conocimiento de ese tipo de solicitudes exige la valoración de aspectos legales y probatorios que muchas veces escapan a la competencia del juez de tutela. De esta manera es claro que la improcedencia es una regla general para este tipo de solicitudes.

13. A pesar de lo expuesto, el mismo artículo 86 constitucional establece excepciones a la regla de improcedencia al señalar que el amparo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; o cuando el mecanismo del que se dispone no resulta idóneo y/o eficaz.

En otras palabras, se ha indicado que la acción de tutela procede para el reconocimiento de prestaciones laborales cuando: i) no existe otro medio de defensa judicial, o de existir, éste no es apto para salvaguardar los derechos fundamentales en juego; o ii) cuando se pruebe la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, con las características de grave, inminente y cierto, que exija la adopción de medidas urgentes y necesarias para la protección de derechos fundamentales.

14. Frente a la primera hipótesis, la jurisprudencia ha desarrollado algunos parámetros adicionales que permiten a los jueces establecer con mayor grado de certeza la idoneidad o no de los medios ordinarios.... En efecto, la edad, el estado de salud, las condiciones económicas, sociales y familiares son aspectos relevantes que se deben ponderar, cuando se exige a una persona asumir las complejidades propias de los procesos ordinarios, pues en algunos casos ello podría redundar en que la vulneración de un derecho fundamental se prolongue injustificadamente.

Adicionalmente esta Corporación ha resaltado que cuando se busca la obtención del dinero derivado de un auxilio por incapacidad laboral, el juez de tutela debe considerar que la ausencia o dilación injustificada de dichos pagos afecta gravemente la condición económica del trabajador, así como sus derechos al mínimo vital y a la salud, pues éste deriva su sustento y el de su familia de su salario, que es suspendido temporalmente en razón a una afectación de su salud. Así la mora en dichos pagos puede situar al reclamante en circunstancias apremiantes, que ponen en riesgo su subsistencia digna.

15. Aunado a lo anterior y frente a la hipótesis del perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional ha recalcado la necesidad de evaluar los siguientes rasgos (i) la inminencia, es decir, que la situación genera una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral sea de gran intensidad; (iii) la necesidad urgente de protección; y (iv) el carácter inaplazable de la acción de tutela para que realmente pueda garantizar el restablecimiento de los derechos fundamentales de manera integral...

Por lo expuesto, si el juez verifica que el accionante se encuentra en alguna de tales hipótesis, debe considerar que la acción de tutela procederá, "para remover los obstáculos que enfrentan quienes soportan circunstancias de debilidad manifiesta, reivindicar su derecho a la igualdad real y efectiva frente a quienes no padecen esas contingencias y materializar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad intrínsecos a la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, dentro del cual se inscribe el derecho a recibir oportunamente el pago de las incapacidades laborales"...".

3.1. Frente al tema de la oportunidad con que cuentan la Empresas Promotoras de salud para hacer efectivo el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas como incapacidades medicas por enfermedad general, los Decretos 4023 de 2011 y 780 de 2016[5] indican que las EPS deben realizar el pago de estas prestaciones económicas al aportante, a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS, y que la revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento de estas prestaciones económicas se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud del aportante.

4. El asunto sometido a estudio.

El problema jurídico que debe resolver el Despacho se circunscribe a determinar, principalmente, si a la señora KATHERINE SOTO DUQUE se le están vulnerando sus derechos fundamentales, en razón a la negativa y/o tardanza por parte de la accionada en expedir, reconocer y cancelar las incapacidades médicas reclamadas y hacer efectivo el control por la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación.

5. El Material Probatorio Recaudado.

Con la prueba documental allegada se pueden establecer los siguientes hechos:

---

[5] Artículo 2.2.3.1 Pago de prestaciones económicas. A partir de la fecha de entrada en vigencia de las cuentas maestras de recaudo, los aportantes y trabajadores independientes, no podrán deducir de las cotizaciones en salud, los valores correspondientes a incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad y/o paternidad. El pago de estas prestaciones económicas al aportante, será realizado directamente por la EPS y EOC, a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS o EOC. La revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas se efectuara dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud del aportante. En todo caso, para la autorización y pago de las prestaciones económicas, las EPS y las EOC deberán verificar la cotización al Régimen Contributivo del SGSSS, efectuada por el aportante beneficiario de las mismas.

a. La señora KATHERINE SOTO DUQUE se identifica con la cédula de ciudadanía No. 1.053.819.210 según se desprende de la copia de su documento de identidad.[6]

b. La accionante se encuentra afiliada en calidad de cotizante a la EPS SALUDTOTAL desde el 1° de noviembre de 2017, según se desprende de la certificación expedida por la Base de Datos Única de Afiliación expedida por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES en estado activo al 31 de enero de 2020.[7]

c. De la copia de la Historia Clínica expedida el 10 de julio de 2019 por VIRREY SOLIS se desprende que la accionante fue atendida por su afiliación al régimen contributivo de la EPS SALUDTOTAL y debido a un diagnóstico de (M545) LUMBAGO NO ESPECIFICADO.[8]

d. De la copia de la Historia Clínica expedida el 11 de julio de 2019 por AVIDANTI SAS se desprende que la accionante fue atendida de carácter particular y debido a un diagnóstico de (M545) LUMBAGO NO ESPECIFICADO.[9]

e. De la copia de la Historia Clínica expedida el 12 de julio de 2019 por VIRREY SOLIS IPS se desprende que la accionante fue atendida por su afiliación al régimen contributivo de la EPS SALUDTOTAL y debido a unos diagnósticos de (R522) OTRO DOLOR CRÓNICO y (F039) HIPOTIROIDISMO NO ESPECIFICADO.[10]

f. Por parte de VIRREY SOLIS se generó en favor de la accionante la incapacidad del 9 de julio al 10 de julio de 2019 por el diagnóstico llamado (M545) LUMBAGO NO ESPECIFICADO.[11]

g. Por parte de VIRREY SOLIS se generó en favor de la accionante la incapacidad del 12 de julio al 21 de julio de 2019 por el diagnóstico llamado DOLOR LUMBAR CRÓNICO.[12]

h. De la copia de la Historia Clínica expedida el 24 de julio de 2019 por VIRREY SOLIS IPS se desprende que la accionante fue atendida por su afiliación al régimen contributivo de la EPS SALUDTOTAL y debido a unos diagnósticos de (E039) HIPOTIROIDISMO NO ESPECIFICADO, (E66) OBESIDAD Y (M541) RADIOCULOPATIA.[13]

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

---

[6] Ver folio 2.
[7] Ver folio 3.
[8] Ver folios 4 a 6.
[9] Ver folios 7 a 8.
[10] Ver folios 9 a 13.
[11] Ver folio 14.
[12] Ver folio 15.
[13] Ver folios 16 a 19.

i. Por parte de VIRREY SOLIS se generó en favor de la accionante la incapacidad del 23 de julio al 29 de julio de 2019 por el diagnóstico llamado M541.[14]

j. La accionante radicó el 16 de septiembre de 2019 un derecho de petición ante la EPS SALUDTOTAL solicitando se le informara la razón por la cual no le habían reconocido las incapacidades médicas del 9 de julio por 2 días, 12 de julio por 10 días y 23 de julio por 7 días.[15]

k. La EPS SALUDTOTAL expidió el oficio de fecha 26 de septiembre de 2019 dirigido a la accionante suministrando respuesta al derecho de petición, en el mismo refiere la razón por la cual no cancelan las incapacidades médicas, frente a la incapacidades generada por 2 días aluden que debe ser asumida por el empleador y frente a las demás refieren que no es procedente debido a que para cuando fueron generadas no se encontraba afiliada su contrato laboral había culminado.[16]

l. La accionante alude que a la fecha no se encuentra laborando y depende económicamente de su padre quien devenga un salario mínimo mensual, con dicha suma cancelan arrendamiento, alimentación y servicio públicos y su progenitor quien cancela su seguridad social mediante una cooperativa.[17]

m. Según Informe de Secretaría que antecede, la accionante informó telefónicamente que el servicio de valoración por Medicina Física y Rehabilitación fue materializado el 13 de febrero de 2020.[18]

n. Según certificado de existencia y representación legal de la entidad accionada la Dra. Gloria Esperanza Duque Ospina es la Administradora Principal de la Sucursal EPS SALUDTOTAL[19]

o. Según planillas de pago de seguridad social se tiene que nombre de la accionante se han realizado los pagos correspondientes a la Seguridad Social en salud a través de SALUDTOTAL EPS desde el mes de mayo de 2019 al 7 de julio de 2019.[20]

6. Conclusiones.

Descendiendo al caso concreto se tiene que la señora KATHERINE SOTO DUQUE presentó acción de tutela contra la EPS SALUDTOTAL, por considerar que se están vulnerando sus derechos fundamentales con la negativa y/o tardanza en expedir, reconocer y pagar las incapacidades

[14] Ver folio 20.
[15] Ver folios 21 a 23.
[16] Ver folios 24 y 25.
[17] Ver folio 35.
[18] Ver folio 45.
[19] Ver folio 39 a 40.
[20] Ver folio 41 a 44.

del 9 al 10 de julio de 2019, del 12 al 21 de julio de 2019 y del 23 al 29 de julio de 2019 y hacer efectivo el servicio de valoración por especialidad en Medicina Física y Rehabilitación, servicio que según voces de la interesada ya se hizo efectivo.

Frente a esta figura el H. Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha explicado que la carencia actual de objeto por hecho superado, se origina cuando desaparece la afectación al derecho fundamental invocado.

Así lo indicó la Corte en sentencias T-096 de 2006 y T-047 de 2016, cuando explicó que, en virtud de la figura del hecho superado, si la amenaza actual e inminente que vulnera los derechos fundamentales de una persona deja de existir, entonces el amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez, respecto del caso específico resultaría inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.

Ahora, en lo relacionado con las incapacidades médicas reclamadas la entidad accionada indicó que no procede el pago de las mismas en razón a que éstas fueron generadas cuando ya había terminado su contrato laboral.

En ese orden de ideas, en primer lugar resulta preciso advertir que el no reconocimiento y pago de las incapacidades médicas por la accionada, reclamadas por la señora Katherine Soto Duque del 9 al 10 de julio de 2019, del 12 al 21 de julio de 2019 y del 23 al 29 de julio de 2019, NO tiene justificación, y dicha situación constituye una vulneración al derecho al mínimo vital y la subsiguiente materialización del perjuicio irremediable en la accionante, haciéndola sujeto de especial protección del Estado, pues según lo manifestó no tiene más ingresos para su sustento, de manera que al no poder desempeñar sus labores de trabajador, en razón de sus incapacidades, sin el reconocimiento económico de las mismas, no tiene como solventar sus necesidades, personales y familiares, de donde resulta fácil concluir, que durante los días en que estuvo y ha estado incapacitada, ha tenido que afrontar una difícil situación económica.

Teniendo en cuenta las circunstancias de hecho antes señaladas, se concluye que el no pago de las citadas incapacidades, hace presumir en este caso la afectación del mínimo vital de la accionante y la ponen ante el riesgo de causarle un perjuicio irremediable; cuestión que exige la intervención inmediata del Juez Constitucional, abriendo paso a la procedencia de la acción de tutela impetrada.

De acuerdo con la normatividad legal vigente y lo dicho por la H. Corte Constitucional, se tiene que el esquema de responsabilidades de los actores del Sistema General de Seguridad Social Integral en el reconocimiento y pago de las incapacidades laborales de origen común es el siguiente:

> "En el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos (2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general y de las Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer (3) día y de conformidad con la normatividad vigente."[21]

Significa lo anterior que las incapacidades que van entre el primer y el segundo día, competen económicamente al empleador, de conformidad con la modificación que introdujo el artículo 1° del Decreto 2943 de 2013, al parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, y las generadas del día 3 al 180 están a cargo de las Entidades Promotoras de Salud a las cuales los accionantes se encuentran afiliados.

En el caso puesto a consideración del Despacho se tiene que a la accionante le fueron generadas las incapacidades ya relacionadas, que corresponden a los primeros 180 por lo que la entidad encargada de asumir el pago de las mismas es la EPS a la cual ésta se encuentra afiliada.

Por lo anterior se ordenará a la EPS SALUDTOTAL, a través de su gerente o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación del presente fallo reconozca y cancele a la señora **KATHERINE SOTO DUQUE** las incapacidades médicas prescritas por su médico tratante del 12 al 21 de julio de 2019 y del 23 al 29 de julio de 2019.

No se ordena el pago de la incapacidad del 09 al 10 de julio de 2019, por cuanto corresponde al empleador.

Finalmente se advierte a la parte accionada que este Despacho no compare la razón por la cual se niegan a proceder de conformidad bajo el argumento que la señora Soto Duque, para el momento en que fueron generadas las prestaciones económicas no se encentraba con contrato laboral vigente, pues dentro del certificado expedido por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social ADRES se desprende que se encuentra afiliada en estado activo a dicha entidad desde el 1° de noviembre de 2017, sumado a ello obran las planillas de pago a seguridad social correspondientes al mes de julio de 2019.

---

[21] Decreto 2943 de 2013

Por lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES, CALDAS,** administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política y la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la existencia de un Hecho Superado frente a la pretensión encaminada a ordenar a la entidad accionada hacer efectiva la valoración por medicina física y rehabilitación, dentro de la Acción de Tutela presentada por la señora **KATHERINE SOTO DUQUE** en contra de **SALUDTOTAL EPS.**

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social de la señora **KATHERINE SOTO DUQUE** dentro de la acción de tutela presentada contra la **EPS SALUDTOTAL.**

TERCERO: ORDENAR a la **EPS SALUDTOTAL** a través de su Representante Legal o quienes hagan sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, si aún no lo ha hecho, reconozca y cancele a la señora **KATHERINE SOTO DUQUE,** las incapacidades médicas dadas del 12 al 21 de julio de 2019 y del 23 al 29 de julio de 2019, por lo dicho en la parte motiva.

CUARTO: NO ORDENAR el pago de la incapacidad del 09 al 10 de julio de 2019, por cuanto corresponde al empleador.

QUINTO: ORDENAR a la **EPS SALUDTOTAL** a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, informar a este Despacho sobre el cumplimiento de esta decisión, conforme a lo establecido por el artículo 27 del Decreto 2591 de 1.991.

SEXTO: ADVERTIR que el incumplimiento de lo dispuesto en el presente fallo dará lugar a la imposición de sanciones al representante legal de la entidad demandada, en los términos del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, y a las penales del artículo 53 ibídem.

SEPTIMO: NOTIFICAR esta decisión a las partes advirtiéndoles que la misma puede ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

OCTAVO: ENVIAR lo actuado a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme esta decisión, si no fuere impugnada dentro de la oportunidad legal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA MARÍA HERNÁNDEZ MARÍN
JUEZA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia